

De las clases al caos: el límite que no podemos tolerar

Juan Pablo Mellado
Delegado Presidencial de Biobío



Por estas horas, como País hemos sido testigos de un hecho que no puede dejarnos indiferentes. La grave y cobarde agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la Universidad Austral de Chile, no solo constituye un ataque a una autoridad de Gobierno, sino que representa una señal preocupante respecto de los límites que algunos están dispuestos a cruzar.

Las universidades, por esencia, son espacios de encuentro, reflexión y construcción de conocimiento. Son, o debiesen ser, el punto de convergencia entre distintas miradas: académicos, estudiantes, autoridades, sector privado y la sociedad en su conjunto. En ellas existen canales formales y legítimos para disenter, dialogar y construir acuerdos. Cuando esos canales son reemplazados por la violencia, no solo se rompe la convivencia, sino que se traiciona el sentido mismo de la educación superior.

Lo ocurrido en Valdivia no es una manifestación más. Es un retroceso. Es la expresión de conductas involuntivas que solo generan odio, polarización y un profundo daño a la convivencia nacional. No podemos normalizar que, bajo ninguna causa, se agrede físicamente a una persona, menos aún en un espacio que debiese promover el respeto y la inteligencia por sobre la fuerza.

Pero este no es un hecho aislado. En la comuna de Los Ángeles, recientemente fuimos testigos de una brutal agresión al interior de un establecimiento educacional agrícola, donde un estudiante fue atacado por sus propios compañeros. Un hecho que golpea con fuerza, porque refleja que este tipo de violencia no distingue niveles ni espacios: está permeando distintos ámbitos del sistema educativo.

Esto nos obliga a mirar más allá del caso puntual. Hay aspectos estructurales que deben revisarse con seriedad,

incluido el sistema mediante el cual se distribuyen los estudiantes en los distintos establecimientos escolares. Hoy vemos cómo, en algunos casos, se están generando entornos complejos que terminan afectando a todos: estudiantes, docentes, familias y a los propios centros educativos, que ven debilitada su capacidad de formar en un ambiente seguro.

Cabe también una reflexión incómoda pero necesaria. Muchos de quienes protagonizan estos hechos acceden a la educación superior gracias al esfuerzo de todos los chilenos, a través de políticas como la gratuidad. Ese beneficio, que busca abrir oportunidades y construir un País más justo, no puede ser utilizado para amparar conductas violentas. Los chilenos no tienen por qué financiar espacios donde algunos van a destruir, en lugar de aprender y aportar.

La gran mayoría de las familias de Chile quiere algo muy distinto. Quiere vivir en paz. Quiere que sus hijos puedan estudiar tranquilos, que los trayectos desde la casa al colegio o al trabajo sean seguros, y que los espacios educativos sean lugares de crecimiento, no de temor. Esa es una aspiración legítima, transversal y profundamente humana.

Como Gobierno, encabezado por el Presidente José Antonio Kast, tenemos un compromiso claro: resguardar el orden, fortalecer las instituciones y garantizar que Chile sea un País donde prime el respeto. No podemos permitir que acciones de unos pocos empañen el esfuerzo de una gran mayoría que cree en el diálogo, el trabajo y la convivencia pacífica.

La violencia nunca será el camino. Y menos aún en la educación. Porque cuando la violencia entra a las aulas, lo que está en juego no es solo una autoridad o un recinto, sino el futuro mismo de nuestra sociedad.